

Honduras

Honduras es una democracia multipartidista constitucional, con una población de aproximadamente 7.7 millones de habitantes. En el 2005, el candidato del Partido Liberal, José Manuel Zelaya Rosales, ganó la presidencia de la república en elecciones nacionales que fueron consideradas por los observadores internacionales y nacionales como generalmente libres y justas. Los partidos Liberal y Nacional continuaron dominando la política del país. Mientras las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo instancias en donde elementos de las fuerzas de seguridad actuaron en forma independiente de la autoridad gubernamental.

Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la policía y agentes de gobierno; ejecuciones arbitrarias y sumarias cometidas por elementos clandestinos y ex miembros de las fuerzas de seguridad; actos de violencia en contra de detenidos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones crueles en las prisiones; actos de corrupción e impunidad dentro de las fuerzas de seguridad; fracaso en la aplicación de un debido proceso de la ley; prolongados períodos de detención previos al juicio; politización del sistema judicial; corrupción judicial y debilidad institucional; erosión de la libertad de prensa; corrupción en los poderes legislativo y ejecutivo; restricciones gubernamentales en el reconocimiento de las instituciones no-gubernamentales (ONG's); violencia y discriminación en contra de las mujeres; prostitución y abuso infantil; trata de personas; discriminación en contra de comunidades indígenas; violencia y discriminación en contra de personas debido a su orientación sexual; falta de una efectiva aplicación de las leyes laborales; y trabajo infantil.

Respeto por los Derechos Humanos

Sección 1 El Respeto por la Integridad de la Persona, incluyendo la Libertad de:

a: Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

Hubo informes que el gobierno o sus agentes fueron responsables de cometer ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, particularmente la de jóvenes y niños por parte de grupos clandestinos que podrían haber incluido a miembros de las

fuerzas de seguridad. Casa Alianza reportó que por lo menos ocho de los casos implicaron a las fuerzas de seguridad. La oficina del Fiscal General presentó acusaciones en algunos de los casos, pero no se registraron condenas durante el año y Casa Alianza no brindó datos con relación a las sentencias de la corte en el caso de los asesinatos de menores asesinados. El gobierno cuenta con una Unidad Especial de investigación para Asesinatos de Menores, pero el proceso investigativo muy raras veces pudo identificar a los implicados.

Durante el mes de agosto, la ONG Casa Alianza reportó que 86 menores de 18 años y 273 jóvenes entre las edades de 19 y 22 años fueron asesinados. Casa Alianza reportó que mas del 78 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados por personas desconocidas, 9 por ciento por personas conocidas, 5 por ciento por elementos de seguridad privada; 2 por ciento por las fuerzas de seguridad del gobierno; y 8 por ciento fue atribuido a la violencia de pandilleros.

Varios grupos y familiares de victimas juveniles dicen haber proveído a los fiscales e investigadores con evidencias de colusión entre elementos policiales y líderes empresariales en la comisión de los asesinatos. La Secretaria de Seguridad Pública declaró que realizó investigaciones de oficiales policiales individuales por su participación en los asesinatos de niños callejeros; sin embargo no se obtuvo información sobre los resultados de dichas investigaciones.

A mediados del año una corte de Tegucigalpa retiró todos los cargos en contra del coronel retirado Alexander Hernández Santos, miembro del desaparecido batallón de inteligencia 3-16, por violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzosas, y los asesinatos de 184 personas durante la década de los 80's.

Mientras algunos observadores consideraron que algunos de los asesinatos de alto perfil tenían relación entre sí, tal como los ambientalistas, líderes laborales, abogados, políticos, con el crimen organizado y con traficantes de drogas, otros casos eran aparentemente motivados por razones políticas.

El 11 de julio, dos asesinos no identificados mataron al abogado Marco Antonio Fonseca ante un testigo; él se convirtió en la víctima número 17 de su gremio en ser asesinado hasta esa fecha.

En julio, asaltantes desconocidos en las afueras de la ciudad de Juticalpa emboscaron y asesinaron a Shamir Guifarro Ramírez, Henry Arturo Chacón, y Nelda Ochoa – hijo, suegro, y suegra,

respectivamente, del ambientalista Mario Guifarro, quien había sido asesinado en septiembre del 2007. Guifarro Ramírez fue el único testigo de la muerte de su padre. No se detuvieron sospechosos en ninguno de los casos de los Guifarro. Las investigaciones de de la Fiscalía identificaron a Yuni Alexander Sánchez, Jorge Tejada Pacheco and José Angel Rosa Pacheco como los principales sospechosos en el asesinato de Mario Guifarro e indicaron que este último podría haber tenido negocios ilícitos con Rosa Pacheco.

Al acercarse las elecciones primarias del 30 de noviembre, se perpetraron varios asesinatos motivados por política, los que algunos analistas han interpretado como "mensajes" del crimen organizado para el Partido Liberal y el presidente Zelaya en particular, para que deje de maniobrar para permanecer en el poder. El 12 de noviembre, el candidato a vice alcalde, Danilo Edgardo Castro Padilla, fue asesinado en La Lima. El 14 de noviembre, Julio Cesar Padilla, candidato por el Partido Liberal para la alcaldía de Morazán, Yoro, también fue asesinado. El 22 de noviembre, hombres enmascarados mataron a Mario Fernando Hernandez Bonilla, diputado del congreso por el Partido Liberal y uno de los cuatro vice presidentes del congreso.

Hubo movimientos en varios asesinatos de alto perfil que se perpetraron en años anteriores. El 14 de octubre, las autoridades en Chiapas, Mexico, arrestaron a Rodolfo "Fofo" Humberto Salinas Castejón, sospechoso principal en el asesinato acaecido en el 2007 del capitán de la armada Alejandro Humberto Zavala Motiño, guardaespaldas del presidente Zelaya. Salinas Castejón permanecía en detención previo al juicio para el final del año. Las investigaciones también identificaron como sospechosos a Juan Ramón Castejón Mendoza (que murió en junio del 2007) y Darwin Alexander Villalta, que se dio a la fuga.

El Ministerio Público ordenó el arresto de David Portillo en relación con el asesinato en el 2007 del líder garífuna Félix Ordóñez Suazo en Punta Piedras, departamento de Colón. Portillo permanecía en calidad prófugo al final del año.

Las autoridades identificaron a Carlos Alberto Navas Gonzales como el principal sospechoso en el asesinato perpetrado en noviembre del 2007, del presidente regional de la Cruz Roja, José Raúl Carranza Soto, en Puerto Cortés. No se conocieron nuevos datos en el proceso del caso, pero Navas Gonzales permaneció en prisión acusado de traficar con armas ilegales. El único testigo del caso fue asesinado dos días después de testificar ante las autoridades policiales.

El 1 de julio, una corte condenó a cuatro policías por el asesinato en el 2006 de Heraldo Zúniga y Roger Murillo, dos ambientalistas que trabajaban para proteger el bosque en el departamento de Olancho. Los policías Linton Omar Cáceres Rodríguez, Rolando Antonio Tejeda Padilla, Juan José Talavera Zavala y José Arcadio Gonzales fueron condenados a 20 y 30 años de prisión. Sin embargo, entre el 21 y 24 de Julio Cáceres, Talavera y Gonzales se escaparon de prisión, y para final del año no se sabía su paradero.

El 29 de abril, las autoridades arrestaron a Ítalo Iván Lemus Santos (quien recientemente había sido deportado de regreso al país) por el asesinato del ambientalista Carlos Luna en 1998. Otros sospechosos incluyendo Jorge Adolfo Chávez y el supuesto autor intelectual, José Angel Rosa, permanecieron en libertad, y no se supieron mas detalles sobre el proceso del caso.

El crimen violento continuó alentando el crecimiento de servicios no autorizados de seguridad privada y grupos clandestinos que supuestamente patrullan colonias y municipalidades para prevenir el crimen. Las organizaciones de derechos humanos señalaron que los consejos de seguridad ciudadana (conformados como grupos de protección para los barrios y comunidades), así como las compañías de seguridad privada, con nexos con oficiales militares o policías activos o retirados, actuaron en complicidad con la policía como grupos de seguridad clandestinos o escuadrones de la muerte para eliminar presuntos criminales habituales.

El 11 de junio, Irene Ramirez, miembro del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), fue asesinada en Trujillo. Anteriormente ella ya había recibido una serie de amenazas por parte de terratenientes locales y grandes hacendados en la región. No se conocieron avances en el caso.

El 5 de agosto, 11 personas fueron asesinadas en una masacre como resultado de una disputa de tierras entre la familia del oficial de policía Henry Osorto y el MCA en Silín, departamento de Colon. Después de los asesinatos, el gobierno, según se reportó, negoció un pago a los terratenientes de mas de 75 millones de lempiras (aproximadamente \$ 3.9 M) para permitir que los campesinos permanecieran en las tierras, recibieran títulos de propiedad legales, y obtuvieran permiso para construir 400 casas nuevas. El 17 de octubre, las autoridades arrestaron a José Isabel Morales López y lo acusaron de planear la masacre de Silín. De acuerdo con el fiscal asignado al caso, 31

campesinos, todos miembros del MCA, también fueron acusados de causar el incendio premeditado agravado y el asesinato de 11 personas.

El 2, 9 y 14 de octubre, asaltantes desconocidos asesinaron a 3 activistas y líderes comunitarios dedicados a defender los derechos de la tenencia de tierras, Fredis Osorto, Elías Murcia y Ubence Aguilar, en el sector de Cofradía en el departamento de Cortés.

b. Desapariciones

Hasta el mayo 22, las autoridades reportaron haber recibido 227 casos de desapariciones de menores: algunas de las mismas se creía que eran asesinatos por secuestro motivadas criminalmente, y otros se atribuyeron actos voluntarios de personas que dejaron el país para buscar empleo en el exterior.

El 6 de octubre, José Alfredo Guevara, Carlos Lazo y Hector Herrera desaparecieron supuestamente después de haber sido detenidos por oficiales de la policía.

No se obtuvo información, y no se esperaba obtener alguna sobre el caso en el 2007 de la desaparición de Milton Elías Cardona de su casa de habitación en Siguatepeque, Comayagua.

No se obtuvo información, y no se esperaba obtener alguna, sobre la desaparición en el 2006 sobre los ciudadanos panameños, José Camilo Miranda, David Rodrigo Villalobos Valladares, y Jorge Luis Villalobos Valladares (todos vistos por última vez en custodia por la policía de Roatán) o de Jorge Ruiz Rosales, ex asesor de la Asociación Nacional de hacendados de Honduras y de Elvis Zepeda Barrientos, ambos detenidos por las autoridades del gobierno.

El 5 de diciembre, el gobierno publicó un decreto que creó el Programa Nacional de Reparaciones, el cual tenía como propósito considerar casos específicos de asesinatos y desapariciones para proceder a repararlos; el director del programa no había sido nombrado al final del año.

c. Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes

A pesar que la Constitución y la ley prohíben tales prácticas, hubo ocasiones en las cuales oficiales del gobierno las

utilizaron, incluyendo golpizas por parte de la policía y otros abusos a personas detenidas.

El 23 de julio, fuerzas policiales asesinaron a golpes a Carlos Enrique Mayorga López, originario de Copán. El oficial de policía Wilson Rubio arrestó a Mayorga conduciéndolo a la posta policial local donde cinco oficiales más golpearon a Mayorga en la cabeza, el estomago y los genitales, antes de dejarlo en libertad. Mayorga falleció horas después en el hospital local; a Rubio se le suspendió de su cargo.

Marvin Javier Martínez Bermúdez y Jose Santiago López Villalobos permanecieron en prisión esperando juicio por cargos de haber asesinado a la juez Alba Leticia Bueso. No se pudieron confirmar las acusaciones que las autoridades de seguridad los torturaron en agosto del 2007 para forzarlos a confesar su supuesto crimen. Dos sospechosos más, Rubén Antonio Pineda Hernandez y Olvin Alexander López Moreno, acusados de ser cómplices del asesinato de la Juez Bueso, están prófugos.

En diciembre de 2007 el Ministerio Público acusó a cinco oficiales de la policía de cometer torturas y realizar la detención ilegal de varios miembros de la ONG Asociación Arcoíris Gay Lésbica de Comayagüela. No ha habido más información sobre este caso.

Condiciones de las Prisiones y Centro de Detención

Las condiciones en las prisiones fueron deplorables y su seguridad fue deficiente. Grupos de derechos humanos informaron que los prisioneros sufrieron de un severo hacinamiento, desnutrición, y falta de salubridad adecuada. El 11 de julio, el Fiscal especial para los Derechos Humanos anuncio la investigación en una celda subterránea posiblemente utilizada como una celda para mantener en condiciones infrahumanas a personas en una población remota de Villa Vieja; sin embargo, la investigación del Ministerio Público determinó que no habían indicios de evidencias contundentes de tortura y violaciones a los derechos humanos.

Los prisioneros fueron objeto de otros abusos y vejámenes, incluyendo violaciones por parte de sus compañeros de celda. Se les negó la alimentación adecuada así como otras necesidades básicas. Fugas de prisiones por medio de pagos y otros medios continuaron ocurriendo. El 23 de octubre, la ONG Centro para la Prevención de la Tortura y la Rehabilitación (CPTRT) informó que 10 convictos fueron torturados y abusados en camino a prisiones

y cárceles. En su reporte también agregaron que la policía municipal preventiva rutinariamente realizaba redadas de jóvenes vulnerables o considerados "delincuentes" (como por ejemplo, los homosexuales, lesbianas, transexuales, operadores del sexo y drogadictos) sin causa alguna o sin explicar sus derechos ante la ley.

Varios oficiales de prisión, incluyendo Wilfredo Maradiaga Oseguera y Aldo Rodolfo Oliva Rodriguez, fueron investigados por abusar de su autoridad y permitir que los prisioneros gozaran de privilegios tales como salidas ilegales.

Los levantamientos en las prisiones, causados primordialmente debido a las condiciones infrahumanas y a la violencia entre las pandillas, sucedieron en las prisiones más grandes de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca. Hasta el 27 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública reportó que 39 prisioneros habían sido asesinados mientras guardaban prisión, en la mayoría de los casos víctimas de violencia entre pandillas.

Las autoridades de las prisiones trataron de separar a prisioneros de pandillas opuestas en diferentes aéreas de la prisión para reducir las presiones por violencia entre pandillas. El 26 de abril, nueve prisioneros murieron en la penitenciaría de San Pedro Sula durante un levantamiento entre criminales comunes y pandilleros.

Las personas con enfermedades mentales, así como aquellos que sufren de tuberculosis y enfermedades contagiosas, fueron detenidos y reclusos como parte de la población general de la prisión. Las organizaciones de derechos humanos acusaron a los oficiales de las prisiones de utilizar fuerza excesiva en contra de los prisioneros, incluyendo golpizas, aislamiento y amenazas. Se informó, de fuentes creíbles, que los oficiales de prisión permitieron que se realizaran actos de violación y asaltos físicos en contra de prisioneros homosexuales.

Las prisioneras femeninas generalmente fueron encarceladas en facilidades separadas bajo condiciones similares a las de los prisioneros masculinos, pero contrario a sus contrapartes masculinas, no recibieron privilegios tales como las visitas conyugales. En algunas prisiones de baja seguridad, las mujeres fueron encarceladas con la población general. Los niños hasta la edad de dos años se les permitieron permanecer con sus madres en prisión. Los detenidos en espera de fecha de juicio, generalmente fueron encarcelados con los presos convictos.

Mientras que el gobierno operó cuatro centros de detención juvenil, en algunos casos un número de menores de edad fueron detenidos y encarcelados con adultos.

El hacinamiento en las prisiones continuó siendo un problema, debido a que los jueces continuaron la tendencia de colocar a menores en los centros de detención en ausencia de otros programas de educación y de rehabilitación.

El gobierno generalmente permitió visitas a las prisiones de parte de observadores independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, y las mismas se realizaron durante el transcurso del año.

d. Arresto y Detención Arbitraria

La Constitución y la ley prohíben el arresto y detención arbitraria, pero las autoridades ocasionalmente no acatan estas prohibiciones efectivamente.

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) estimó que un número indeterminado de oficiales de seguridad arrestaron arbitrariamente, y algunas veces torturaron, a más de dos docenas de personas, bajo el programa gubernamental conocido como Operación Nación. El programa consiste en que grupos diversos de operativos policiales, ordenados por el gobierno, realizan monitoreo de la población en diferentes sectores en las ciudades mas pobladas.

La policía arrestó a personas diversas basando sus acciones en factores tales como forma de vestir y tipo de tatuajes.

El 29 de septiembre, policías utilizando pasamontañas supuestamente arrestaron a Mario Álvarez, Nelson Alvares, Heliodoro Amador y Alonso Andino, activistas campesinos a favor de los derechos de tierras y miembros de la Asociación campesina Unión y Fuerza, en el pueblo de Suntule, departamento de Francisco Morazán. Al día siguiente, de acuerdo a informes noticiosos creíbles, otro escuadrón de policía se presentó en la casa del secretario general de la organización y forzaron a su esposa, a punta de pistola, a firmar documentos en los cuales se traspasaban los derechos de las tierras del grupo a otras manos en un término de 60 días. No se conoció ninguna investigación sobre este caso.

Roles de la Policía y de los Entes de Seguridad

La Secretaría de Seguridad supervisa las operaciones de la policía, incluyendo aquellas que corresponden a la Policía Preventiva, Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), Policía de Tránsito, la Policía Fronteriza, Policía Turística, y la Policía Penitenciaria. La corrupción y la impunidad fueron problemas graves dentro de las fuerzas de seguridad. La nueva Ley de Policía, aprobada en octubre, hace una reestructuración de la Secretaría de Seguridad, lo que resulta en la creación de una Oficina de Asuntos Internos (AI) la cual responde directamente al Ministro.

AI investiga las denuncias de actividades ilegales cometidas por miembros de las fuerzas policiales. La Policía Preventiva y la DGIC tienen una oficina de responsabilidad profesional que lleva a cabo revisiones internas de las malas actuaciones policiales.

De acuerdo al Ministerio Público, durante el año se presentaron 312 informes en contra de la policía con el Fiscal Especial para los Derechos Humanos, de los cuales 163 casos fueron investigados y 43 se descubrió que tienen mérito. La mayoría de estos informes involucraban el uso excesivo de la fuerza, la detención ilegal y la extorsión.

El 17 de abril, durante la marcha por los fiscales en huelga, un hombre armado amenazó y intentó, sin éxito, de forzar al líder educativo Sergio Rivera a entrar en un vehículo. Los testigos dijeron que el vehículo estaba lleno de agentes de las fuerzas especiales élite del gobierno.

El 6 de junio, un tribunal encontró culpable y condenó a 21 de los 43 miembros del gobierno implicados en la "Masacre de la Cárcel de El Porvenir" que tuvo lugar en el 2003; entre los condenados estaba el jefe de policía de La Ceiba y un comisionado de policía.

El 10 de septiembre, después de infiltrarse en una reunión sindical en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dos agentes de la Policía Nacional vestidos de civil fueron identificados, se les encontró que llevaban consigo una lista de más de 130 reconocidos líderes de diversos sectores de la sociedad civil marcados como "peligrosos" en la lista. La lista contenía el nombre tachado de la asesinada líder sindical Altagracia Fuentes con la palabra "muerta" escrita al lado de su nombre.

La Secretaría de Seguridad reportó que durante el año las autoridades procesaron 268 oficiales de policía por delitos que van desde abuso de autoridad hasta tráfico de drogas, violación y homicidio.

La intimidación y la violencia de las pandillas, especialmente en el transporte público, continuaron siendo graves problemas y llevaron al gobierno a posicionar oficiales de seguridad en muchos autobuses públicos. En algunos casos la policía arremetió mortalmente contra jóvenes y menores de edad, a menudo con impunidad.

Arresto y Detención

La ley establece que la policía puede detener a una persona sólo con una orden judicial, a menos que la detención sea por orden de un fiscal, realizada durante la ejecución de un delito, cuando existe una fuerte sospecha de que una persona ha cometido un delito y pueden tratar de eludir la persecución penal, o cuando la persona se captura con pruebas relacionadas con un delito. La policía debe informar claramente a la persona de los motivos de la detención y ponerla a la orden de la autoridad competente dentro de las siguientes 24 horas. El fiscal tiene 24 horas para decidir si hay causa probable para una acusación, y luego el juez tiene 24 horas para decidir si se emite una orden de detención temporal, que puede durar hasta seis días; en este momento, el juez debe tener una audiencia previa al juicio para examinar la causa probable y tomar una decisión sobre si la detención preventiva debe continuar. La ley establece la libertad bajo fianza a personas acusadas de delitos graves y el derecho de los privados de libertad a establecer rápido contacto con los miembros de su familia. Aunque la ley también establece que los privados de libertad tienen el derecho de contactar rápidamente a un abogado de su elección y, si es indigente, a un abogado proporcionado por el estado, estos requisitos no siempre fueron aplicados en la práctica.

La detención prolongada previa al juicio fue un problema grave. Durante el año, aproximadamente el 53 por ciento de la población penitenciaria estaba pendiente de juicio. La ley exige la liberación de cualquier privado de libertad cuyo caso no ha llegado a juicio y cuyo tiempo de detención excede a la pena máxima en prisión por el delito del cual se le ha acusado. La ineficiencia, la corrupción judicial y la falta de recursos suficientes retrasaron los procedimientos en el sistema de justicia penal. De acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, de los 271,000 casos presentados a la DGIC en el 2007, sólo 6,000

llegaron a juicio. De los 6,000 casos, sin embargo, el 80 por ciento resultó en sentencias.

Como resultado de los retrasos en los juicios, muchos de los detenidos en prisión preventiva ya habían servido el tiempo equivalente al máximo permitido para el delito por el cual se les acusaba. Muchos privados de libertad permanecieron en la cárcel después de haber sido absueltos o haber cumplido su condena debido a la falta de funcionarios para tramitar sus cartas de libertad.

e. Negación de un Juicio Público Justo

Aunque la constitución y las leyes disponen de un poder judicial independiente, el sistema judicial no contaba con fondos ni personal suficiente, estaba inadecuadamente equipado, a menudo inefectivo, y sujeto a patrocinio, corrupción e influencia política.

Los bajos salarios y la falta de controles internos aplicados a funcionarios judiciales contribuyeron a hacerles susceptibles al soborno, e intereses especiales poderosos ejercieron influencia en los resultados de los procesos judiciales.

Existen 12 cortes de apelación, 77 cortes de primera instancia con jurisdicción general, y 330 juzgados de paz con jurisdicción limitada. La Corte Suprema de Justicia nombra a todos los jueces de los juzgados de letras y de paz. Los medios de comunicación y diversos grupos de la sociedad civil continuaron expresando preocupación de que la división de ocho a siete entre los partidos Liberal y Nacional en la Corte Suprema de Justicia diera como resultado las sentencias politizadas que han contribuido a la corrupción en las instituciones públicas y privadas.

Procedimientos Judiciales

La ley establece el derecho a un juicio público justo. Aunque la ley dispone que el acusado se presume inocente y tiene derecho a una audiencia inicial con un juez, a la libertad bajo fianza, a que consulte con un abogado de manera oportuna, a tener un abogado proporcionado por el Estado si es necesario, y el derecho al recurso de apelación, estos derechos no se observaron con frecuencia.

Aunque la ley prohíbe los casos de procedimiento donde un sospechoso carece de apoderado legal, el gobierno asignó

recursos mínimos a los fiscales. Como resultado, el defensor público no pudo satisfacer la demanda de asistencia legal a aquellos que no pudieron pagar un apoderado legal.

Prisioneros y Detenidos Políticos

No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos Judiciales Civiles e Indemnizaciones

Hay un cuerpo judicial independiente e imparcial para asuntos civiles, incluyendo el acceso a un tribunal para obtener una indemnización por el cese de una violación de los derechos humanos. No se informó de estos casos durante el año.

El CODEH y el Comité de la ONG de Familiares Detenidos y Desaparecidos fueron las únicas organizaciones que formularon cargos contra los violadores de los derechos humanos mediante la búsqueda de reparos monetarios. Un litigante puede aportar dichos cargos cuando el tribunal penal determina que los daños pueden ser saldados.

f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, Familia, Hogar, o Correspondencia

Aunque la Constitución y las leyes generalmente prohíben este tipo de acciones, una excepción legal permite la entrada en cualquier momento en caso de una emergencia o para prevenir la ejecución de un delito. Continuaron las acusaciones creíbles de que personal de la policía ocasionalmente no obtuvo la autorización requerida antes de entrar en una casa privada.

Los Garífunas y otros líderes de los derechos de los indígenas siguieron quejándose de que el gobierno falló en corregir las acciones previas que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad pública y privada que desalojaron por la fuerza a agricultores y grupos indígenas que reclamaban tenencia de las tierras basados en la reforma agraria o leyes ancestrales de los títulos de propiedad (véase la sección 5).

Sección 2 Respeto a las Libertades Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La constitución y las leyes generalmente establecen libertad de expresión y de prensa, y hubo substancial libertad de prensa en el país. Sin embargo, hubo informes de intimidación por parte

del gobierno a periodistas, el gobierno se adjudicó frecuencias de transmisión de televisión, y la autocensura periodística. La ley prohíbe a los manifestantes hacer declaraciones que puedan incitar a las personas a realizar disturbios.

Algunos periodistas reconocieron la práctica de la autocensura, cuando sus reportajes pudieron confrontar los intereses políticos o económicos de los propietarios de medios de comunicación. No hubo informes de que a los medios de comunicación internacionales se les hubiera prohibido operar libremente.

Un pequeño número de empresarios poderosos con influencias comerciales, políticas, y vínculos familiares, son dueños de la mayoría de los medios de comunicación del país. El gobierno influyó en la cobertura de prensa de sus actividades a través de la concesión o negación de acceso a los funcionarios del gobierno, creando una situación en la cual los medios de comunicación estaban tan estrechamente relacionados y vinculados al sistema político que los empresarios poderosos influenciaron fuertemente la agenda de noticias y, por tanto, las elecciones y las decisiones políticas.

En agosto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), haciendo caso omiso de un fallo judicial, transfirió los derechos de transmisión al Canal Ocho de la empresa privada, Teleunsa, a la Oficina del Presidente. A principios de año, Conatel se negó a liberar los derechos de transmisión de Canal 12 a su propietaria, la empresa Eldi. El 20 de noviembre, una sentencia judicial ordenó a Conatel entregar los derechos de transmisión a Eldi; sin embargo, a final de año, Conatel no había cumplido.

El 11 de septiembre, las ONGs publicaron dos informes describiendo las amenazas a la libertad de prensa por medio de la práctica de "publicidad oficial". Los informes detallaron como el gobierno manejó la cobertura de prensa a través de un mayor acceso y ganancias publicitarias para aquellos que producían reportajes favorables, mientras que se les negaba el acceso o se hacían amenazas legales contra aquellos que no los hicieron. Los informes señalaron que "la publicidad oficial" había aumentado y estaba agravada por la concentración de la propiedad de los medios.

El 17 de noviembre, el Presidente Zelaya anunció que buscaría regular los medios de comunicación a través de recursos legislativos para luchar contra una "cultura de la muerte"

propagada por los medios de comunicación, con el apoyo del presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti.

Las ONGs informaron que el Gobierno también dio importantes sumas de dinero a ciertos miembros de los medios de comunicación que cubrieron sus eventos en la forma solicitada. El gobierno ejerció una influencia considerable sobre los medios de comunicación impresos a través del otorgamiento o mantenimiento de una campaña publicitaria oficial pagada.

Los medios de comunicación continuaron siendo víctimas de la venalidad, la politización, y las influencias externas. De acuerdo a las ONGs, los ministros del Gobierno y otros altos funcionarios obtuvieron el silencio de la prensa por medio de la contratación de periodistas como asistentes de asuntos públicos a cambio de altos sueldos y se pagaron periodistas por investigar o reprimir nuevas noticias.

Algunos miembros de los medios de comunicación afirmaron que cuando ellos intentaron informar a profundidad sobre las figuras políticas nacionales o sobre la corrupción oficial, se les negó ocasionalmente el acceso a la información del gobierno. Acceso a la Casa Presidencial y al Presidente, especialmente durante las visitas internacionales, las cuales estaban limitadas a los "amigos" de la prensa y fueron arbitrariamente concedidas y retiradas por el personal de la Casa Presidencial.

Thelma Mejía, miembro del Consejo Nacional Anti Corrupción y ex directora de la ONG C-Libre, informó que al menos tres docenas de periodistas, muchos de ellos en las zonas rurales, fueron objeto de amenazas y de intimidación durante el año.

El 1 de enero, dos hombres no identificados mataron a tiros a José Fernando González, propietario de Radio Mega, en Trinidad, Departamento de Santa Bárbara. La prensa local informó que la policía local había identificado, pero no había detenido, a los culpables.

En abril en Santa Rosa de Copan, Departamento de Copán, el reportero Roberto Carlos Chinchilla del noticiero del Canal 12 y su camarógrafo, Marlon Dubón, recibieron varias amenazas de muerte de parte de dos hombres armados y enmascarados, advirtiéndoles que tenían cinco días para salir de la ciudad antes de ser asesinados.

En mayo, la Directora de Radio Globo, Sandra Maribel Sánchez, anunció que ella y su familia habían recibido amenazas y que

varias veces habían sido seguidos por vehículos sin placas, debido a su apoyo a los fiscales en huelga de hambre que comenzó el 7 de abril (ver sección 3).

El 27 de octubre, las autoridades arrestaron a German David Almendárez como sospechoso del asesinato del periodista de Radio Cadena Voces Carlos Salgado, acontecido en octubre de 2007. A final de año, Almendárez permanecía en custodia en la Penitenciaría Nacional de Támara en espera de juicio.

Libertad en Internet

No hubo restricciones por parte del gobierno sobre el acceso a Internet o informes de que el gobierno monitoreara los correos electrónicos o los sitios de chat de Internet. Individuos y grupos de personas pudieron conectarse en la expresión pacífica de opiniones a través de Internet, incluyendo por correo electrónico.

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de mayo del Instituto Nacional de Estadística, el 10 por ciento de la población tuvo acceso a la Internet.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo restricciones por parte del gobierno sobre la libertad académica o eventos culturales.

b. Libertad de Reunión y Asociación Pacífica

Libertad de Reunión

La Constitución y las leyes establecen la libertad de reunión, y el gobierno respetó generalmente este derecho.

Libertad de Asociación

La constitución y las leyes generalmente establecen la libertad de asociación, y en la práctica el gobierno respetó generalmente este derecho. Las leyes de asociación delictiva, sin embargo, prohíben la asociación ilícita y prescriben penas de prisión de tres a 12 años. Las organizaciones de derechos humanos criticaron la ley y su implementación como una restricción innecesaria sobre el derecho a asociarse libremente, mientras que grupos de defensa de los derechos de los homosexuales expresaron su preocupación de que la ley podría ser utilizada

para tipificar como delito las actividades sociales y organizaciones de la comunidad homosexual. Durante el año las autoridades aplicaron la ley prohibiendo las asociaciones ilícitas para arrestar a los individuos por ser miembros de la Mara Salvatrucha y otras pandillas. El gobierno utilizó las reformas del Código Penal prohibiendo la asociación ilícita para arrestar y quitar territorio a los supuestos miembros de pandillas, agricultores y personas de las comunidades indígenas.

c. Libertad de Culto

La Constitución y las leyes establecen la libertad de culto, y en la práctica el gobierno respetó generalmente este derecho. El gobierno requiere que los misioneros extranjeros obtengan permisos de entrada y de residencia.

Abusos y Discriminación Sociales

No hubo informes de discriminación o violencia contra grupos religiosos, incluyendo actos antisemitas. La población judía fue relativamente pequeña.

Para una discusión más detallada, consulte el Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2008 en www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados y Personas Apátridas

La Constitución y las leyes establecen la libertad de libre circulación dentro del país, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica.

La ley no prohíbe explícitamente el exilio interno o externo forzado, pero el gobierno no hizo uso de esta práctica.

Protección de Refugiados

La ley establece la concesión de asilo o el estatus de refugiado de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó protección contra la expulsión o devolución de refugiados a

países donde su vida o su libertad estarían amenazadas y les concedió condición de refugiado o asilo. Hasta el 19 de noviembre, la Dirección General de Migración no revisó solicitudes para estatus de refugiado. El gobierno cooperó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y otras organizaciones humanitarias de ayuda a los refugiados y solicitantes de asilo.

El 4 de noviembre, las autoridades detuvieron a ocho sudafricanos con pasaportes falsos en la frontera con Guatemala. Las personas posteriormente solicitaron asilo. A partir del 20 de noviembre, se mantuvieron en la cárcel, pero estaban siendo asistidos por el CODEH a la espera de una decisión sobre sus solicitudes.

Sección 3 Respeto por los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La Constitución y las leyes establecen el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres y justas, celebradas sobre la base del sufragio casi universal. Miembros activos del clero y la milicia y fuerzas civiles de seguridad no están autorizados a votar.

Elecciones y Participación Política

En las elecciones nacionales de noviembre de 2005, que fueron consideradas por observadores internacionales como generalmente libres y justas, José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal ganó la presidencia por una mayoría de votos. Los observadores percibieron irregularidades en aproximadamente 1,100 urnas electorales, pero ningún patrón sistemático de fraude. Los partidos políticos pudieron operar sin restricciones y sin interferencia externa.

Las mujeres participaron activamente en política. Se registraron 31 mujeres electas como diputadas en un Congreso que cuenta con 128 miembros, y 16 mujeres presidieron comisiones del Congreso. Ocho de los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo su presidente, eran mujeres. Hubo tres mujeres ejerciendo como secretarías de estado, seis sub-secretarías, una mujer como Comisionado Nacional de Policía, y cinco mujeres como embajadoras.

Hubo dos miembros garífunas y uno lenca en el Congreso Nacional.

Corrupción y Transparencia Gubernamental

La ley provee penas criminales para los actos de corrupción; sin embargo, el gobierno no implementó la ley correctamente, y los empleados públicos continuaron realizando actos de corrupción con impunidad. Los poderes ejecutivo y judicial fueron sujetos de actos de corrupción e influencias políticas. Se mantuvo la percepción que las instituciones gubernamentales para combatir la corrupción no dieron los pasos necesarios para combatir efectivamente la corrupción, no tuvieron el interés en hacerlo, o carecieron de la capacidad profesional para investigar, arrestar y procesar a aquellos involucrados en actos de corrupción de alto nivel. Los indicadores de gobernabilidad global del Banco Mundial reflejaron la corrupción como un problema serio en el país.

Muchos observadores alegaron que el control institucional considerable que ejercen las élites del país creó el potencial para abusar de las instituciones del país y de la gobernabilidad democrática.

En abril, se identificó una red que traficaba inmigrantes cubanos por el país hacia los Estados Unidos. Por lo menos 15 cubanos recibieron visas de trabajo o de residencia fraudulentas de parte del cónsul hondureño en La Habana. En julio renunciaron cinco partes implicadas en el escándalo, incluyendo el Director de Migración, el Secretario General de Migración, el Secretario General de la Cancillería y el Cónsul en La Habana. Las investigaciones de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado estaban pendientes al finalizar el año.

El 7 de abril, cuatro fiscales montaron tiendas de campaña en los bajos del edificio del Congreso Nacional y comenzaron una huelga de hambre para protestar la supuesta corrupción dentro del gobierno. La protesta rápidamente tomó fuerza con 40 participantes para finales del mes de abril; los manifestantes pedían una auditoría independiente al Ministerio Público y la remoción del Fiscal General Leonidas Rosa Bautista y del Fiscal Adjunto Omar Cerna. Los fiscales finalizaron la huelga de 38 días el 14 de mayo, poco después de que el Congreso Nacional pasara dos medidas cumpliendo las exigencias de los huelguistas.

El 11 de agosto, una corte ordenó la detención de Guillermo Seamman, ex Director de la Dirección General de Aeronáutica

Civil, pendiente su juicio por 39 cargos de abuso de autoridad. Seamman supuestamente aprobó más de 39 certificaciones para empleados de líneas aéreas, ciudadanos de Perú y Venezuela, que no cumplían los requisitos para recibir licencias e ingresaron al país para tramitar sus papeles, como lo requiere la ley. Al final del año, Seamman fue puesto en libertad quedando pendiente su juicio.

No había información disponible sobre la investigación del Tribunal Superior de Cuentas referente a los cargos presentados en el año 2007 contra 13 alcaldes que malversaron los fondos de la reducción de la pobreza proporcionados por los países donantes.

En agosto, una corte falló en contra del ex Alcalde de Tegucigalpa, Oscar Acosta, encontrándolo culpable de fraude en la compra de tierras sobrevaloradas sin haber una licitación pública, y en septiembre lo condenó a cuatro años de cárcel, pero le admitió pagar L.14,600 (cerca de \$800) para cancelar la sentencia.

No se supo de avances en la investigación de la Fiscalía Contra la Corrupción, que empezó en el 2007, en el Registro Nacional de las Personas por hacer cobros ilegales a solicitantes de partidas de nacimiento y tarjetas de identidad.

Sección 4 Actitud del Gobierno Sobre Investigaciones Internacionales y No Gubernamentales de Supuestas Violaciones a Derechos Humanos

Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales operaron en el país investigando y publicando los resultados de sus averiguaciones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales generalmente cooperaron con las organizaciones sin fines de lucro. Con ciertas excepciones notables, los funcionarios gubernamentales fueron usualmente receptivos a los puntos de vista de las ONGs. En la práctica, la burocracia gubernamental retrasó la inscripción de algunas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las de grupos de apoyo a los gays y lesbianas.

El 2 de abril, un pistolero desconocido le disparó y mató a Luis Gustavo Galeano Romero, un maestro y promotor de la Delegación Departamental de Tocoa, Colón a la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio solicitó la

ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los compañeros de Romero, y la Organización Iberoamericana del Ombudsman pidió la investigación del asesinato de Romero.

A lo largo del año, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) siguió recibiendo amenazas. El 31 de enero, las autoridades arrestaron a César Romero, un agente de la policía de investigación y ex empleado de la compañía de seguridad SETECH, y a Ramón Solís, empleado de SETECH, bajo cargos del asesinato de Dionisio Díaz García, abogado de ASJ, asesinado en el 2006. Para finales del año, ambos guardaban cárcel a espera de sus juicios.

El gobierno cooperó con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos representantes visitaron el país varias veces en el transcurso del año.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), una institución gubernamental autónoma, estuvo dirigida por el Comisionado de Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio López, quien tuvo libre acceso a todas las instituciones civiles y militares y a centros de detención, y operó con inmunidad total y sin la interferencia del gobierno o de los partidos políticos. En general, el gobierno cooperó con el CONADEH, pero le asignó una cantidad inadecuada de fondos y otros recursos. En marzo, Custodio entregó el reporte anual del Comisionado de Derechos Humanos, que criticaba los altos niveles de violencia en el país. El 22 de junio, Custodio advirtió que el país se estaba convirtiendo en un "narco estado" y declaró que había evidencias de que por lo menos tres carteles de la droga ya se habían infiltrado a la Policía Nacional. La legislatura fue receptiva a los hallazgos del reporte. El público le dio confianza sustancial al pronunciamiento del Comisionado pero se mostró insatisfecho que el gobierno le diera al Comisionado recursos inadecuados para desempeñar sus funciones efectivamente.

Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales, y Trata de Personas

La ley prohíbe la discriminación en base a raza, género, discapacidad, idioma, o clase social; sin embargo, no fue efectivamente aplicada en la práctica. Las elites políticas, militares y sociales generalmente gozaron de impunidad en el sistema jurídico; las mujeres fueron sujetas a discriminación social y económica.

Mujeres

La ley criminaliza todo tipo de violaciones, incluyendo la violación marital. Con la excepción de la violación marital, la cual se evalúa según el caso, la violación se considera un crimen público. Un violador puede ser procesado aún cuando la víctima no presente una denuncia. Las sentencias por violación son de tres a nueve años de prisión, y los tribunales han cumplido con estas sentencias en la práctica.

La violencia contra la mujer, incluyendo los asesinatos sistemáticos (femicidios), se incrementó. La ley penaliza la violencia doméstica con penas de dos a cuatro años en prisión. Las únicas sanciones legales para actos de violencia doméstica de menor grado son de servicio comunitario y detención preventiva por 24 horas si el agresor es capturado durante el acto. La ley establece una sentencia máxima de tres años en prisión por desobedecer una orden de restricción relacionada con un crimen de violencia intrafamiliar.

El gobierno no aplicó efectivamente la ley con relación al abuso doméstico. El Ministerio Público dijo que la violencia doméstica constituía la mayoría de las denuncias que recibió y que calculaba que la cantidad de denuncias del año sobrepasarían las 8,000 que se recibieron en el año 2007. El 4 de junio, el Ministerio Público anunció que asignaría a 27 fiscales para cubrir la creciente tendencia en femicidios.

Mientras anunciaban su campaña de ponerle fin a los "femicidios", el Centro de Derechos de la Mujer y el Centro de Estudios de la Mujer informaron que 171 mujeres habían sido asesinadas hasta el 18 de noviembre y que el 90 por ciento de las muertes estaban impunes.

El gobierno trabajó con CARE y otras ONGs para proporcionar capacitaciones especializadas a oficiales de policía para la aplicación de la ley relacionada con la violencia doméstica. Dos instalaciones, ambas manejadas por ONGs, proporcionaron albergue para mujeres maltratadas. El albergue en Tegucigalpa acomodó a 20 mujeres y a sus familias. Además, otros seis centros privados para mujeres maltratadas ofrecieron asistencia legal, médica y psicológica. Había 61 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil agrupadas bajo el Colectivo de Mujeres Contra la Violencia, involucrado en la lucha contra la violencia a mujeres.

Aunque la prostitución de adultos es legal y relativamente común, la ley prohíbe la promoción y facilitación de la

prostitución. Las mujeres fueron traficadas para ser explotadas sexualmente y para garantizar el pago de deudas.

La ley prohíbe el acoso sexual en los lugares de trabajo, y establece penas de uno a tres años de prisión. El acoso sexual continuó siendo un problema, pero el gobierno no aplicó la ley de forma efectiva.

Aunque la ley establece que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos de acuerdo a la ley, incluyendo los derechos de propiedad en caso de divorcio, en la práctica a las mujeres se les negaron estos derechos.

La mayor parte de las mujeres que desempeñaban ocupaciones de baja calidad y posiciones informales con salarios bajos, como el trabajo doméstico, no contaron con regulaciones legales de protección. Las mujeres estuvieron representadas en pequeña proporción en la mayor parte de profesiones, y las actitudes culturales limitaron sus oportunidades profesionales. De acuerdo a la ley, las mujeres tienen igual acceso que los hombres a oportunidades educativas. La ley requiere que los empleadores paguen a las mujeres salarios iguales por trabajos similares, pero los empleadores usualmente consideran que los trabajos de las mujeres son menos exigentes que los de los hombres para justificar el pago de salarios más reducidos. De acuerdo a la Encuesta de Hogares del 2008 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los salarios de las mujeres representaban el 87 por ciento de los salarios de los hombres. A pesar de que existen disposiciones legales contra tales prácticas, las trabajadoras del sector de exportación de textiles continuaron reportando que fueron obligadas a realizarse pruebas de embarazo como condición de empleo.

El Instituto Nacional de la Mujer desarrolla la política de la mujer y de género. Varias ONGs trabajaron activamente sobre diversos temas relacionados con la mujer, incluyendo el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, el cual trabajó en temas de trata de personas, explotación sexual comercial, empleados de la maquila textil y trabajadoras domésticas.

Niños

El gobierno estuvo comprometido con los derechos y el bienestar de los niños.

La ley garantiza la educación gratuita, universal y obligatoria hasta los 15 años; sin embargo, un estudio del 2008 del Instituto Nacional de Estadísticas calculó que un 59 por ciento de los niños entre los 5 a 18 años asistieron a algún tipo de escuela o centro de aprendizaje, mientras que el 90 por ciento de ellos entre los 5 a los 12 años asistieron a la escuela.

El abuso infantil fue un serio problema. La ley establece sentencias de prisión de hasta 3 años para personas condenadas por abuso a menores. No hay información disponible sobre el número de casos reportados de abuso infantil.

El abuso de jóvenes y niños en barrios pobres y en pandillas continuó siendo un problema serio. Miembros de la policía y personas particulares participaron en acciones violentas contra jóvenes y niños pobres. Casa Alianza reportó que el 66 por ciento de los niños en la calle habían sido asaltados por la policía. Grupos de derechos humanos afirmaron que algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con grupos civiles y utilizaron fuerza letal contra supuestos criminales reconocidos o contra sospechosos de pertenecer a pandillas, así como contra otros jóvenes no reconocidos por estar involucrados en actividades criminales (véase la Sección 1 a).

El tráfico infantil para la explotación sexual comercial y la prostitución infantil fue un problema. El trabajo infantil fue un problema, especialmente en el cultivo de café y melones, la pesca, el buceo de langostas, y la producción de piedra caliza y cal.

El 26 de agosto a Raúl Edgardo Aragón se le acusó de abuso sexual agravado contra niños. Aragón era el ex administrador del Centro Nueva Esperanza que cuida a niños en situación de riesgo.

En agosto, la Comisión de Educación del Congreso Nacional anunció la investigación oficial del abuso sexual de maestros hacia sus alumnos. Había 10 testimonios documentados de estos casos en el Ministerio Público. El 3 de diciembre, las autoridades arrestaron al Profesor René Arturo Valderramos por abusar sexualmente de sus alumnos.

El 31 de octubre, el gobierno distribuyó a los medios los nombres de cerca de 100 sospechosos de crímenes sexuales contra niños que permanecían sin captura.

La ley prohíbe la asociación ilícita, incluyendo la membresía a pandillas y bandas del crimen organizado, por lo cual prescribe

términos de 3 a 12 años en prisión. Las estadísticas de fin de año indicaban que había cerca de 36,000 miembros de pandillas, muchos de ellos menores de edad. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) calculaba que las pandillas eran responsables del 15 por ciento del crimen violento en el país. La membrecía a las pandillas se limitaba principalmente a las zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El gobierno y las organizaciones de derechos infantiles estimaron que había 20,000 niños en la calle, de los cuales solo la mitad tenían albergue. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo informó que 88 por ciento de los niños de la calle utilizaban sustancias ilegales, incluyendo inhalantes de pegamento y marihuana. Muchos niños de la calle fueron víctimas de abuso o explotación sexual. De acuerdo con el Fondo para la Niñez de las Naciones Unidas, más de 2,700 niños emigraron solos durante el año.

El gobierno municipal de Tegucigalpa operó 12 albergues temporales con capacidad para 240 niños. Casa Alianza operó 3 albergues (con capacidad para 175 niños) para víctimas de explotación sexual comercial, niños en la calle, y niños con problemas de abuso de sustancias. La ONG "Feed the Children" operó un albergue para 40 varones en La Ceiba. Casa Alianza estimó que un promedio de 85 a 100 niñas que anteriormente fueron víctimas de trata de personas (edades de 12 a 17 años) permanecieron en sus albergues y participaron en programas de rehabilitación. Casa Alianza brindó asistencia a aproximadamente 2,500 niños durante el año, intentando reintegrar al mayor número con sus familias. Otras organizaciones privadas y centros del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia también albergaron niños de la calle y cuidaron a aproximadamente 2,500 niños.

Trata de Personas

Aunque una nueva ley penaliza la trata de personas, hubo informes que personas fueron víctimas de trata desde fuera y dentro del país.

El país fue principalmente un país de origen y de tránsito para mujeres y niños víctimas de trata de personas para la explotación sexual comercial. Las mujeres y niños fueron llevados a Belice, El Salvador, Guatemala, México, y también internamente, más que todo de zonas rurales hacia zonas urbanas. La mayoría de las víctimas extranjeras traficadas hacia Honduras

provenían de países vecinos. Durante el año, el gobierno regresó a docenas de víctimas de trata de personas provenientes de México y de Guatemala. En la zona metropolitana de Tegucigalpa, se estima que varios centenares de niños fueron víctimas de la explotación sexual comercial.

Las pandillas, el crimen organizado y traficantes de personas estaban dentro de los principales traficantes con el propósito de realizar actividades de explotación sexual comercial. Existen reportes que familias vendieron a sus hijas con el propósito de comercializarlas. El 9 de febrero, Emilio Fiallos Pina y su esposa Dora Rutilia Saucedo Fiallos fueron arrestados por la supuesta venta de su hija de nueve años al abogado Conrado Zelaya Castellón para explotación sexual.

La trata de personas internacional fue realizada por tierra; el gobierno mantuvo control de las fronteras terrestres del país solo en sectores específicos. La trata de personas fue realizada utilizando tanto documentos válidos como falsificados.

La ley establece penas y define delitos relacionados con la trata de personas, incluyendo incesto, lascivia, abuso, prostitución, pornografía, e infectar deliberadamente a alguien de VIH-SIDA. Las penas incluyen multas que oscilan entre los L.100,000 a L.500,000 (aproximadamente entre \$5,300 a \$26,500) y condenas en prisión de 4 a 20 años de duración. La aplicación de esta ley no ha sido efectiva. Los inadecuados fondos del gobierno para combatir la trata de personas, corrupción, y despidos rutinarios de empleados gubernamentales limitaron la habilidad del gobierno para combatir la trata de personas.

Una reorganización en la Fiscalía Especial para la Niñez en Tegucigalpa le asigna responsabilidades contra la trata de personas a un fiscal, dos abogados, tres investigadores del Ministerio Público y a dos agentes de la Dirección General de Investigación Criminal. En San Pedro Sula, dos fiscales cubren asuntos de trata de personas, mientras un abogado lo hace en Choluteca.

La División en Contra el Abuso, Trata y Explotación Sexual Comercial (DATESI), una unidad de investigación criminal policial, realizó operaciones de detección alrededor del país incluyendo autopistas, aeropuertos, puertos y hoteles.

A lo largo del año, se enjuiciaron 10 casos de explotación sexual en Tegucigalpa y 48 casos permanecieron abiertos. Hubo 32

denuncias formales e investigaciones fuera de Tegucigalpa hasta septiembre.

El 26 de agosto, las autoridades acusaron a Juventina Alicia Cruz Barahona de traficar una cantidad desconocida de mujeres hacia Guatemala. Se le condenó y sentenció a diez años de cárcel.

El 10 de noviembre, Blanca Azucena Merio Amador y su hija Gloria Floriscelda Varela Amador fueron arrestadas por vender niñas a hombres para su explotación sexual. Ellas supuestamente estaban ligadas a una operación más grande de trata de personas. Mientras detenían a las traficantes, las autoridades pudieron liberar a una menor víctima de explotación sexual.

El gobierno refirió por lo menos siete menores víctimas de trata de personas a la Organización Internacional para Migraciones para su repatriación y refirió a docenas de víctimas cada mes tanto al gobierno como a albergues operados por ONGs para que les brindaran asistencia. Un menor fue repatriado de Guatemala y seis de México; uno por explotación sexual comercial y el resto por tráfico laboral. En el año, hasta finales de septiembre, Casa Alianza se encargó de 245 niñas rescatadas de la explotación sexual.

Desde el año 2006, el gobierno ha llevado a cabo capacitaciones para prevenir la trata con cerca de 7,000 policías, fiscales y jueces y 10,000 estudiantes. El gobierno también ha coordinado la colocación de víctimas en albergues y la asistencia para su rehabilitación con las ONGs y con la OIM. La Comisión Interinstitucional sobre Trata desarrolló un protocolo para la Asistencia a las Víctimas de la Explotación Sexual Comercial, mientras que el Instituto Hondureño para la Niñez y Familia, del gobierno, se concentró en reintegrar a las menores víctimas de trata a sus familias y a la sociedad.

Personas con Limitaciones Físicas

La ley prohíbe la discriminación contra las personas que sufren de discapacidades físicas o mentales para acceder a empleo, educación, servicios de salud, o para realizar servicios diversos al Estado, pero el gobierno no aplicó adecuadamente estos principios. Se estimó que 51 por ciento de las personas con limitaciones físicas eran analfabetas, comparado con el 19 por ciento entre la población general.

Los estatutos establecen que es ilegal que un empleador discrimine a un trabajador a causa de una limitación física. Durante el año, no hubo informes de discriminación en contra de personas con limitaciones para acceder a empleo, educación, servicios de salud, o para proveer otros servicios al Estado. La ley determina que debe facilitarse el acceso a edificios para personas con limitaciones físicas. En la práctica, solo algunos edificios son accesibles.

Aunque la ley requiere que el Ministerio de Gobernación y Justicia mantenga una oficina para personas con limitaciones físicas, el gobierno no facilitó fondos o personal para operar esta oficina. Existe un Comisionado para personas con limitaciones físicas en la Casa Presidencial, y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional también se enfocó en asuntos de importancia para personas con limitaciones físicas.

El 10 de octubre, la Asociación Hondureña de Sordo-mudos llevó a cabo una marcha en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para protestar su exclusión del sistema educativo, de la participación ciudadana, de un trabajo digno, y de los medios. El grupo estima que cerca del 85 por ciento de un aproximado de 75,000 hondureños sordo-mudos se les privó de estos derechos.

La Congresista Dayana Burke, una garífuna que quedó ciega a los 15 años, fue la primera mujer con limitación física miembro del Congreso. Ella impulsó los esfuerzos por reformar los derechos de las personas con limitaciones físicas.

Pueblos Indígenas

Aproximadamente 621,000 personas, que constituyen el ocho por ciento de la población general, eran miembros de grupos indígenas o grupos étnicos. Estos pobladores, que incluyen miskitos, tawahkas, pech, tolupanes, lencas, chortíes, nahuales, isleños y garífunas, vivieron en 362 comunidades y, en general, tuvieron poco o ningún poder político en la toma de decisiones que afectan sus tierras, sus culturas, sus tradiciones y la utilización de recursos naturales.

La mayor parte de los títulos de las propiedades indígenas eran comunitarios, estableciendo derechos de utilización de las tierras a determinados miembros del grupo étnico. Usualmente, la definición de las propiedades indígenas es confusa, y se ha hecho en base a documentos que datan desde mediados del siglo XIX. La falta de títulos de propiedad claros ocasionó

invasiones y conflictos de expropiación con pobladores no indígenas sin tierras y poderosas elites empresariales e instituciones gubernamentales interesadas en explotar las costas, bosques, y otras tierras que han sido tradicionalmente ocupadas o utilizadas por grupos indígenas o de otras etnias. Tanto las comunidades indígenas como las no indígenas criticaron la supuesta complicidad del gobierno para la explotación de la madera y de otros recursos naturales en estas tierras. Amnistía Internacional (AI) informó sobre la utilización de cargos criminales con motivaciones políticas para detener a personas indígenas. AI afirmó que estas detenciones comúnmente tenían la intención de "obstaculizar los esfuerzos de líderes indígenas para asegurar el reconocimiento de la reivindicación de los títulos de propiedad comunitarios de sus grupos étnicos".

Hubo varias protestas de parte de los garífunas y de otros grupos indígenas por disputas de derecho a tierra y percibieron la discriminación del gobierno. Líderes garífunas continuaron emplazando al gobierno sobre sus preocupaciones con relación a la ejecución de proyectos de desarrollo comercial a gran escala que se realizan en tierras costeras que han sido tradicionalmente ocupadas y utilizadas por sus comunidades. El gobierno permitió el desarrollo de proyectos turísticos de compañías nacionales e internacionales en las tierras en disputa, utilizando contratos de arrendamiento por 100 años, señalando que estas tierras volverían a ser propiedad de los garífunas cuando expire este período. Durante el año, líderes garífunas informaron que fueron víctimas de acoso, amenazas, y asaltos.

En marzo, sujetos desconocidos mataron a dos jóvenes tolupanes, José Mastul y Geovanny Banegas Sevilla, quienes se supone pertenecían a un grupo dedicado a reclamar las tierras ancestrales de la tribu Tolupán. No hubo arrestos en el caso.

El 5 de junio, el activista garífuna Santos Feliciano Aguilar Alvares fue secuestrado, golpeado y amenazado por 10 guardias de seguridad privada empleados de una compañía de bienes raíces en San Juan, Tela, Atlántida. Inmediatamente antes de la golpiza, Santos había participado en una asamblea comunal que tenía el propósito de facilitar el diálogo entre la comunidad y la compañía.

El 23 de junio, casi 3,000 maya-chortíes armados con piedras y lanzas cerraron las Ruinas de Copán para protestar la violación de parte del gobierno a los términos del acuerdo de derechos de

tierra de 1997, el cual, decían ellos, les garantizaba solo el 35 por ciento de la tierra que se les prometió.

El 24 de septiembre, personal de la Fuerzas Armadas que patrullaba la Reserva Silvestre Cuero y Salado le dispararon a ocho pescadores garífunas con armas M-16, matando a Guillermo Morales Herrera. Los garífunas aseguraron que el incidente ilustraba el patrón discriminatorio de acoso de parte de las autoridades locales, actuando en contubernio con intereses comerciales locales dispuestos a sacar al grupo de sus tierras tradicionales y permitir la construcción de desarrollos industriales y hoteleros. Las autoridades detuvieron a tres de los cuatro soldados implicados en el asesinato, mientras que el cuarto huyó de la zona. Los líderes garífunas sostuvieron reuniones con líderes militares en octubre y acordaron respetar los derechos tradicionales de los garífunas.

El gobierno realizó esfuerzos mínimos para trabajar con los grupos indígenas para solventar sus preocupaciones en relación a la tenencia y el uso de sus propiedades ancestrales. Los tribunales comúnmente negaron recursos legales a grupos indígenas y frecuentemente favorecieron a las partes no indígenas que cuentan con recursos e influencia. La falta de resarcimiento legal habitualmente ocasionó que los grupos indígenas intentaran recuperar sus tierras por medio de invasiones a la propiedad privada, lo que provocó que las autoridades tomaran represalias por la fuerza.

Otros Abusos Sociales y Discriminación

No existen leyes discriminatorias fundamentadas en orientación sexual, pero en la práctica, la discriminación social basada en la orientación sexual fue generalizada. Varias ONGs indicaron que los crímenes impulsados por odio aumentaron, particularmente durante la época de las campañas políticas, cuando las minorías se convierten en blancos políticos. Los representantes de las ONGs dedicadas a los derechos de la diversidad sexual aseguraron que las fuerzas de seguridad mataron y abusaron a sus miembros. En los casos en que personas lesbianas, homosexuales y transgénero fueron encontradas muertas, el fiscal se encontró con serias dificultades debido a que las víctimas habían ocultado su identidad u orientación sexual o, en muchos casos, se estaban escondiendo de sus familias.

Las investigaciones criminales se clasificaron como género femenino o masculino, pero no reconocieron la categoría de "persona transgénero". Grupos de derechos de diversidad sexual aseguraron que fuerzas de seguridad, instituciones de gobierno y empleadores del sector privado utilizaron prácticas discriminatorias anti-homosexuales para negarles trabajo. Estos grupos también reportaron que la intimidación, temor a represalias y la corrupción policial causaron que las personas homosexuales y lesbianas víctimas de abusos se rehusaran a presentar cargos o proceder con las acusaciones.

El gobierno eliminó el requisito, como condición para la personería jurídica, que las organizaciones de derechos de diversidad sexual eliminaran cualquier referencia en sus estatutos a la promoción del respeto por los derechos de las personas homosexuales, lesbianas o transgénero.

En octubre, grupos derechos de travestis y homosexuales sometieron una protesta ante el Comité de los Derechos Humanos, solicitando que las autoridades eliminen la prohibición de que las fotos para la tarjeta de identidad se tengan que tomar sin maquillaje y sin accesorios femeninos.

Hubo varios asesinatos o ataques a personas supuestamente por su orientación sexual. La organización de derechos de diversidad sexual, la Asociación Lesbiana-Gay Arco Iris de Comayagüela, informó que entre enero y marzo de 2007, siete homosexuales fueron asesinados debido a su sexualidad por sujetos desconocidos, y que varias personas homosexuales abandonaron el país por temor a la persecución social y de las fuerzas de seguridad. El 30 de octubre, un atacante mató a Yasmin, una trabajadora del sexo transgénero, en Comayagüela, y al día siguiente, un atacante mató a Bibi, otra trabajadora del sexo transgénero, en el centro de Comayagüela. El 18 de diciembre, una trabajadora del sexo transgénero, Cynthia Nicole, fue atacada por tres hombres con tubos y garrotes luego de parar un taxi en Comayagüela.

En marzo de 2007, la policía golpeó y detuvo a Donny Reyes, tesorero de la Asociación Lesbiana-Gay Arco Iris de Comayagüela. Se dice que luego la Policía encarceló a Reyes en una celda con 57 pandilleros que lo violaron y lo golpearon. El único testigo al arresto inicial de Reyes fue asesinado en octubre de 2007. Reyes interpuso una queja formal que, a solicitud de la Corte Suprema, la investigó la unidad de Asuntos Internos. La investigación concluyó que, a pesar de que Reyes mostraba los síntomas de haber sido violado, no se podía establecer con

certeza que sucedió durante su detención. Durante el transcurso de la investigación, las oficinas de la Asociación Lesbiana-Gay Arco Iris fueron saqueadas y todos sus archivos y computadoras robados. La unidad de Asuntos Internos citó a cinco policías: Nelson Daniel Gaitán Sosa, Hill Láinez Núñez, Walker Josué Reyes, Denis Esau Cruz Varela y Walter Cruz Espina, por abandono de sus puestos.

No hubo reportes de violencia social o discriminatoria contra personas con VIH/SIDA.

El 17 de octubre, sujetos desconocidos asesinaron a dos jóvenes ligados a la subcultura punk "Emo."

La discriminación laboral por la edad continuó siendo un problema serio.

Sección 6 Derechos de los Trabajadores

a. El Derecho de Asociación

La ley garantiza el derecho de los trabajadores a formar y a asociarse en sindicatos de su elección, pero en la práctica, los trabajadores ejercieron este derecho con dificultad. La ley prohíbe que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía se organicen en sindicatos, y también prohíbe que los empleados públicos presenten peticiones para la formación de sindicatos o para participar en negociaciones colectivas. De acuerdo a estadísticas del Ministerio del Trabajo, había 519 sindicatos representando aproximadamente al 8 por ciento de la población laboral, excluyendo el sector agrícola, y desde julio, cerca del 13 por ciento de los 133,000 empleados de las maquilas estaban sindicalizados.

La ley prohíbe que existan más de dos sindicatos en una sola empresa, determina que un sindicato debe estar constituido por al menos 30 trabajadores, prohíbe que ciudadanos extranjeros sean dirigentes de un sindicato, establece que los dirigentes del sindicato deben estar empleados en la actividad productiva de la empresa que el sindicato representa, y restringe la formación de sindicatos en empresas agrícolas con menos de 10 empleados.

Los líderes sindicales en ocasión fueron sujetos de violencia y amenazas. El 23 de mayo, Julio Paz mató a Israel García, líder de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH). El

motivo del asesinato fue por un dictamen de uso de tierras proveniente del Instituto Nacional Agrario (INA) a favor de la ANACH.

El 23 de abril, sujetos enmascarados desconocidos le dispararon y mataron a Altagracia Fuentes, Secretaria General de la Federación Hondureña de Trabajadores, y sus dos acompañantes, la líder laboral Yolanda Sánchez, y su conductor, Juan Bautista Aceituno. El 17 de mayo fue detenido Maynor Celín Hernández Matute, sospechoso del crimen, pero detenido bajo cargos de robo no relacionados al crimen. En abril, la Fiscalía de Homicidios emitió una orden de arresto para 11 miembros de una pandilla roba-carros por el asesinato de Altagracia Fuentes y sus acompañantes. Los pandilleros fueron arrestados y acusados de los asesinatos y de intento de robo. A pesar de los arrestos, la evidencia circunstancial sugería que el crimen organizado y otros elementos nefastos dentro del movimiento laboral fueron los que cometieron el asesinato.

La ley garantiza el derecho a la huelga y en la práctica los trabajadores ejercieron este derecho. La ley prohíbe las huelgas en un amplio rango de actividades económicas consideradas servicios esenciales y cualesquiera otros que, a juicio del gobierno, afecten los derechos individuales a la seguridad, la salud, la educación y la vida económica o social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó las restricciones de la ley del derecho a huelga para los trabajadores del sector petróleo y para todos los empleados gubernamentales, a excepción de aquellos que trabajan en las instituciones autónomas del Estado. Aunque los empleados de gobierno ocasionalmente ejecutaron paros de labores ilegales sin reparo alguno, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de declarar ilegales las protestas y despedir a los empleados manifestantes. Las restricciones legales con respecto a las huelgas incluyen una prohibición a las federaciones y confederaciones sindicales de convocar a huelga y el requisito de dos terceras partes de los votos de la totalidad de miembros de la organización sindical para convocar a una huelga.

En septiembre, una huelga de maestros por salarios atrasados paralizó el sistema escolar y se perdieron más de 40 días de clase, terminando a principios de octubre.

b. El Derecho a Organización y Negociación Colectiva

La ley garantiza los derechos de organización y negociación colectiva, pero en la práctica el gobierno no protegió estos derechos. Aunque la ley establece que un empleador debe comenzar a negociar colectivamente cuando los trabajadores han organizado un sindicato, generalmente los empleadores se rehusaron a negociar con el sindicato.

A pesar que la ley prohíbe que los empleadores castiguen a sus empleados por participar en actividades sindicales, ésta fue una práctica común, y algunos empleadores amenazaron con clausurar empresas en donde se organizaron sindicatos, e intimidaron o despidieron a trabajadores que intentaron sindicalizarse. Algunas compañías extranjeras cerraron sus operaciones cuando fueron notificados que sus trabajadores pretendían organizar un sindicato.

El Ministerio de Trabajo puede tomar determinaciones administrativas sobre denuncias de despidos injustificados y establecer multas a las empresas, pero solamente un tribunal de justicia puede ordenar la restitución de un trabajador. Generalmente, los empleadores no respetaron las decisiones de los juzgados de restituir a los empleados que habían sido despedidos por participar en actividades sindicales, y la falta de restitución de trabajadores fue un serio problema.

Aunque la ley prohíbe la elaboración de listas negras, hubo evidencia creíble que señala que las compañías maquiladoras elaboraron listas negras de empleados que intentaron organizar sindicatos. Hubo reportes de trabajadores de maquila que supuestamente fueron despedidos por participar en actividades sindicales habiendo sido contratados por una o dos semanas, siendo despedidos posteriormente sin ninguna justificación. Empleados de maquilas informaron haber visto antecedentes laborales en computadoras que incluían la participación previa en sindicatos en la información del personal. Algunos empleadores informaron a trabajadores previamente sindicalizados que no podían ser contratados debido a su anterior participación en actividades sindicales.

El gobierno no adjudicó los recursos adecuados para que los inspectores laborales cumplieran con sus obligaciones. Las oficinas de inspección del país no contaban con los recursos financieros para cubrir viajes de inspecciones y pidieron que el gobierno proporcionara facilidades de transporte y otras necesidades para que los inspectores pudieran hacer su trabajo.

En marzo, los miembros fundadores de SitraFHIA fueron despedidos sin motivo y luego restituidos por la Fundación Hondureña de Inversión Agrícola (FHIA). En los meses subsiguientes, más de 13 sindicalistas fueron despedidos sin causa, mientras SitraFHIA esperaba respuesta a su inscripción oficial con el Ministerio del Trabajo. En julio, SitraFHIA recibió su inscripción oficial. En octubre, SitraFHIA fue rota por la administración de la FHIA, permaneciendo nueve de sus últimos afiliados hasta el 1 de octubre, y dejando únicamente a su presidente y dos miembros sindicales. FHIA supuestamente le pagó a los afiliados para que renunciaran a su afiliación y que regresaran bajo nuevos contratos no sindicalizados.

El 8 de febrero, 60 sindicalistas de la fábrica Alcoa fueron despedidos ilegalmente. Los trabajadores eventualmente fueron restituidos y se les pagaron sus salarios perdidos. En julio, Alcoa, Inc. anunció que cerraría las operaciones de sus maquilas en El Progreso y Choloma, y el 22 de agosto, Alcoa cerró esas plantas y despidió a 1,800 empleados. El 12 de septiembre, la líder sindical de Alcoa, Lorna Jackson, recibió amenazas de muerte vía mensajes de texto y le dispararon dos sujetos desconocidos. Para fin de año, Jackson permanecía escondida y la investigación del Ministerio Público continuaba.

El 12 de mayo, el Colectivo de Mujeres Hondureñas entregó un informe citando violaciones a los derechos humanos y derechos laborales de parte de la fábrica de textiles Productos San José en San Pedro Sula; detallaba el sistemático encubrimiento de informes de enfermedad y accidentes relacionados al trabajo.

En octubre, Jerzees Choloma, una subsidiaria local de Fruit of the Loom, cerró su planta durante cuatro meses después de que el sindicato de la planta recibió su inscripción oficial con el Ministerio de Trabajo en julio. Anteriormente durante el año, los trabajadores de Jerzees Choloma fueron despedidos sin causa. En octubre, SITRAJERZEES, el sindicato recién inscrito de la planta Jerzees en Choloma, estaba en su primera negociación colectiva cuando la administración rompió la negociación y declaró que la planta cerraría dentro de seis meses. Los trabajadores alegaron que la administración había hecho más de 100 amenazas a los sindicalistas, indicando que la planta cerraría si se formaba el sindicato.

La ley aplica restricciones adicionales sobre huelgas en 102 zonas registradas como zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE) y en 19 parques industriales operando en las ZPE. 26 compañías adicionales que proporcionaron servicios a los parques

industriales tuvieron sus propias zonas libres, fuera de los parques industriales. En ausencia de sindicatos y negociaciones colectivas, varias empresas en las ZPE crearon asociaciones solidarias que, hasta cierto grado, funcionaron como sindicatos con el propósito de determinar salarios y negociar condiciones laborales. Otras compañías en las ZPE utilizaron el salario mínimo para establecer los niveles iniciales de salarios y ajustaron las escalas salariales en las negociaciones con grupos similares de obreros de planta y otros empleados, en base a su antigüedad, habilidades, categorías de trabajo, y otros criterios.

c. Prohibición de Trabajos Forzados o Esclavizantes

En general, la ley prohíbe los trabajos forzados o esclavizantes, incluyendo los realizados por menores; sin embargo, hubo informes de tráfico de menores para la explotación sexual comercial y para la prostitución infantil. Las organizaciones de derechos humanos frecuentemente informaron que, en los sectores de seguridad privada y en hogares, a los trabajadores típicamente se les obligaba a trabajar más de 60 horas a la semana y sólo ganar el límite legal correspondiente a 44 horas.

d. Prohibición del Trabajo Infantil y la Edad Mínima para Trabajar

La ley regula el trabajo infantil y establece que los niños menores entre las edades de 14 a 18 no pueden trabajar, a menos que las autoridades determinen que su trabajo es indispensable para los ingresos de la familia y que el trabajo no interferirá con su educación. La Constitución y la ley establecen que el número máximo de horas de trabajo para un niño menor de 18 años es de 6 horas diarias y 30 horas semanales. Los padres o guardianes legales pueden solicitar un permiso especial del Ministerio del Trabajo para permitir que niños entre las edades de 14 y 15 años trabajen, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo realice un estudio de hogar para asegurarse que el menor demuestra una necesidad económica para trabajar, y que el niño no trabajará fuera del país o en condiciones peligrosas, incluyendo la pesca en mar adentro.

La ley prohíbe realizar labores nocturnas y horas extras para menores de 16 años, y requiere que los empleadores que tienen más de 20 niños en edad escolar trabajando en su negocio proporcionen un lugar para una escuela. En la práctica, la gran

mayoría de niños trabajaron sin contar con un permiso del Ministerio de Trabajo.

El gobierno no dedicó los recursos adecuados o proporcionó los inspectores en las instituciones para que dieran seguimiento, prevención o monitorearan el cumplimiento de las leyes laborales.

El Ministerio del Trabajo no aplicó de forma efectiva las leyes relativas al trabajo infantil, exceptuando al sector maquila, y ocurrieron frecuentes violaciones a las leyes sobre trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo expresó preocupación por la decisión del gobierno de asignar inspectores de trabajo infantil únicamente en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula y solicitó que el gobierno cumpla con sus propias leyes de llevar a cabo inspecciones de trabajo infantil, aunque sea con inspectores de trabajo no especializados.

Los resultados del censo emitido en mayo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informaron que el 13 por ciento de los niños entre las edades de cinco a 17 años trabajaban, del cual el 76 por ciento eran varones; 74 por ciento del trabajo infantil ocurrió en zonas rurales. El salario promedio de un trabajador infantil en una zona urbana era de L.2,199 (aproximadamente \$115), comparado con L.1,471 (\$78) en zonas rurales.

La mayoría de los trabajadores infantiles estaban empleados en agricultura (56 por ciento); otros estaban involucrados en actividades comerciales (18 por ciento), manufactura (9 por ciento), y servicios (8 por ciento). Los niños a menudo trabajaron en la cosecha de melones, café y caña de azúcar, o como pepenadores en basureros; trabajaron en sectores de silvicultura, cacería y pesca; y trabajaron como ayudantes en barcos y como buzos en la industria langostera. Los niños también vendieron productos como frutas, pidieron dinero, lavaron carros y cargaron bultos. Algunos estuvieron empleados en la producción de piedra caliza y de cal. Los niños, predominantemente las niñas, también trabajaron como empleados domésticos, donde a veces estuvieron sujetos a los malos tratos de parte de empleadores de tercera mano. Muchos niños trabajaron por la necesidad económica junto con otros miembros de sus familias.

Una ONG internacional colaboró con varios grupos de la sociedad civil en la ejecución de un programa para fortalecer la capacidad del gobierno y de la sociedad civil para sacar y

prevenir que los menores se involucren en trabajos peligrosos a través de servicios educativos.

El gobierno implementó programas sociales y educativos enfocados hacia los niños en riesgo, incluyendo un programa de becas escolares para proveer dinero para adquirir útiles escolares para familias muy pobres, y un programa de escolaridad alternativo a través de la radio y educación a distancia para niños en áreas rurales distantes que cuentan con pocas escuelas. Los esfuerzos del gobierno tuvieron un mínimo impacto en la reducción del trabajo infantil, tomando en cuenta la pobreza extrema, las condiciones de hambruna en las áreas rurales, y la falta de empleos para los graduados del sistema educativo.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo

El 26 de diciembre, el gobierno anunció un incremento general del 11 por ciento al salario mínimo, a L.5,500 (aproximadamente \$290) al mes, efectivo a partir del 1 de enero, 2009. El incremento puso el salario mínimo del sector privado (no incluyendo al sector agrícola) a la par del salario mínimo del sector público. En el sector agrícola, los empleadores a menudo no pagaron el salario mínimo.

La escala del salario mínimo diario se divide en 10 sectores en base al tamaño de la empresa para la cual labora el trabajador. La escala oscila entre L.55 (aproximadamente \$2.88) para la mano de obra no calificada y L.135 (\$7.13) para los trabajadores de empresas financieras y de seguros.

La ley establece una semana de trabajo de 44 horas máximo, y al menos un período de descanso de 24 horas por cada 6 días de trabajo. La ley requiere el pago de horas extras por el trabajo realizado después de las horas establecidas, y existen prohibiciones sobre la obligatoriedad y la excesiva imposición de horas extras. Los empleadores frecuentemente ignoraron estas regulaciones debido al alto nivel de desempleo y subempleo, y la falta de una efectiva aplicación de la ley por parte del Ministerio del Trabajo. Hubo acusaciones creíbles de horas extras obligatorias en maquilas (particularmente para las mujeres, que componen aproximadamente el 65 por ciento de la fuerza laboral de ese sector), en el sector de seguridad privada, y entre empleados domésticos. Los trabajadores extranjeros gozaron de igual protección bajo la ley.

El Ministerio del Trabajo fue el responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales de salud y seguridad

ocupacional, pero no lo hizo de forma consistente o efectiva. Las normas de seguridad para los trabajadores no fueron observadas apropiadamente, particularmente en la industria de la construcción, en el sector de la industria de la maquila, y en las actividades de producción agrícola. Hubo algunas denuncias que administradores extranjeros de compañías en ZPE y otras instalaciones industriales privadas no cumplieron con las normas de salud y seguridad ocupacional. Trabajadores en la producción de piñas y de otras empresas agrícolas comerciales afirmaron que los empleadores los incluían en listas negras si presentaban denuncias ante las autoridades sobre sus condiciones de trabajo. La ONG Colectivo de Mujeres de Honduras reportó que grandes cantidades de trabajadores de la industria de la maquila sufrían de enfermedades respiratorias (incluyendo tuberculosis), digestivas y de la piel. Estos problemas de salud se debieron al aire contaminado con polvillo y desperdicios de las telas, el ruido, falta de ventilación, falta de equipo de protección y temperaturas extremas.

La ley no garantiza a los trabajadores el derecho de retirarse de una situación peligrosa en su trabajo sin que con ello pongan en riesgo su continuidad laboral.